

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO STC-0413 DE 17 DE ABR 2026

“Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución No. 0038 de 15 de enero de 2025 y Acta de Posesión 014 del 23 de enero de 2025 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función de *“Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”.*

Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta previa para el caso en concreto en virtud del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. ST – 2242 del 19 de diciembre de 2025.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Que la Dirección de la Autoridad Nacional Consulta Previa fue notificada de la Sentencia T-012 de 21 de enero de 2025 proferida por la Sala Tercera Revisión de la Honorable Corte Constitucional, en la que ordena a este Despacho iniciar *“el trámite administrativo de certificación de procedencia de consulta previa para el proyecto de granja avícola “la Isabella” dentro del Corregimiento de Mocondino de la ciudad de Pasto”.* +
- 1.2. Que la Subdirección Técnica dio inicio al trámite correspondiente mediante radicado 2025-2-002410-005299 ID 499446 de 27 de febrero de 2025 en el cual se solicitó al ejecutor del proyecto Granja avícola “La Isabella” información sobre el mismo.
- 1.3. Que el ejecutor no respondió a la primera solicitud por lo que la Dirección de la Autoridad Nacional Consulta Previa reitero la solicitud a través del radicado 2025-2-002410-014144 ID 531096 el 30 de abril de 2025.
- 1.4. Que mediante radicado 2025-2-002410-005300 ID 499448 del 27 de febrero se enviaron preguntas orientadoras a la Comunidad Indígena de Mocondino. Ante la falta de respuesta, la solicitud fue reiterada mediante radicado 2025-2-002410-014151 ID 531105 el 30 de abril de 2025.
- 1.5. Que el ejecutor del proyecto Granja avícola “La Isabella” respondió a la solicitud de información del proyecto mediante radicado 2025-1-002410-036747 ID 539310 de 15 de mayo de 2025. Por lo que, revisada la información allegada, esta Subdirección resolvió la necesidad de realizar una visita de verificación con

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

la Comunidad Indígena de Mocondino perteneciente al Pueblo Quillacinga, con el fin de dar respuesta de fondo a la misma.

- 1.6. Que en el marco de las actividades preparatorias de la visita se convocó las reuniones previas para contextualizar toda la situación y el trabajo a realizarse, a través del radicado 2025-2-002410-018302 ID 544899 del 23 de mayo de 2025 se informó al ejecutor del proyecto y la reunión se adelantó el 28 de mayo de 2025 mientras que a través del 2025-2-002410-018334 ID 544944 de 23 de mayo de 2025 se convocó a la comunidad étnica para la reunión virtual que se ejecutó el 29 de mayo de 2025.
- 1.7. Que la visita de verificación fue convocada mediante radicado 2025-2-002410-020008 ID 550409 del 03 de junio de 2025. Por consiguiente, se delegó un equipo técnico para la realización de la visita de verificación en campo entre los días 17 al 20 de junio de 2025.
- 1.8. Que por solicitud de la Comunidad indígena de Mocondino, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa actuó como puente de comunicación entre la comunidad y el ejecutor del proyecto para la coordinación de las necesidades y requerimientos logísticos para la realización de la visita de verificación.
- 1.9. Que la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa solicitó a la comunidad indígena de manera formal el envío de la información a través de radicado 2025-2-002410-020391 ID 551511 del 04 de junio de esta manera la comunidad respondió mediante correo electrónico enviado el 09 de junio y radicado 2025-1-002410-044712 ID 554484 del 10 de junio de 2025.
- 1.10. Que este Despacho respondió a la comunidad a través de radicado 2025-2-002410-021262 ID 554346 de 09 de junio de 2025 y procedió a dar traslado al ejecutor a través de radicado 2025-2-002410-021314 ID 554467 del 10 de junio de 2025.
- 1.11. Que el 16 de junio de 2025, el Ministerio del Interior fue notificado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto del Auto núm. 257 en el que se admitió la acción de tutela presentada por la Asociación Campesina del corregimiento de Mocondino – ASOCCAMO, y en el que se otorgó la siguiente medida:

5.- REQUERIR al MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, para que, en el marco de la visita de verificación programada para los días 17 al 20 de junio de 2025, garantice un espacio de diálogo efectivo a la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO (ASOCCAMO).

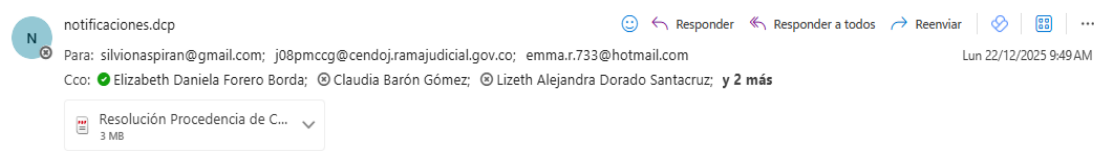
- 1.12. Que la visita de verificación fue desarrollada entre los días 17 al 20 de junio de 2025, según programación previa. Se incluyeron en la agenda reuniones con la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO (ASOCCAMO), tal como lo ordenó el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto y con la COMUNIDAD CAMPESINA SUJETO DE DERECHO DEL CORREDOR ORIENTAL DE PASTO (COMCASUD).
- 1.13. Que, conforme a la información recolectada, la Subdirección Técnica emitió la **Resolución No. ST-2242 del 19 de diciembre del 2025**, la cual resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Que **NO PROCEDE CONSULTA PREVIA con la COMUNIDAD INDÍGENA DE MOCONDINO**, para el proyecto el proyecto: **“PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”**, localizado en jurisdicción

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

del municipio de Pasto, en el departamento de Nariño, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

1.14. Dicha resolución fue notificada a la empresa y a la comunidad étnica, el 22 de diciembre del 2025, a los correos electrónicos silvionaspiran@gmail.com, Emma.r.733@hotmail.com tal como se puede evidenciar a continuación:



La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior emitió la resolución No. ST- 2242 DE 19 DE DIC 2025, de acuerdo con su solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, y ordena su notificación a los correos electrónicos : silvionaspiran@gmail.com , j08pmccg@cendoj.ramajudicial.gov.co, emma.r.733@hotmail.com .

Ahora bien, de acuerdo con su autorización de notificación del acto administrativo mediante correo electrónico, con el fin de surtir trámite de notificación y de conformidad en lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, atentamente nos permitimos remitir la mencionada resolución.

De acuerdo con la ley 527 de 1999 y la Resolución 252 de 2013 del Ministerio, el horario de recepción de los recursos será hasta las hasta las 4:30 pm.

1.15. Que mediante radicado 2026-1-004044-000073 Id: 683750 del 6 de enero de 2026, el señor SILVIO NASPIRÁN JOJOA en calidad de Gobernador CABILDO INDÍGENA DE MOCONDINO interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo expedido.

2. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

En su motivación, expone el recurrente lo siguiente:

“DESCONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA T-012 DE 2025 Y DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

La Resolución recurrida desconoce abiertamente la ratio deciden di de la Sentencia T-012 de 2025, al:

- Pretender Reabrir debates ya resueltos por la Corte Constitucional.*
- Sostener que la Corte fue “inducida al error”. Como si las pruebas documentales, de audio, video, registros fotográficos, aportadas en el proceso de tutela y revisión de la corte constitucional hubieran sido inventadas. Todas las pruebas han sido aportadas por las mismas instituciones gubernamentales e instituciones que cumplen funciones públicas.*
- Sustituir el juicio constitucional por una valoración administrativa propia, personal y amañada a los intereses de quien ostenta grandes capitales económicos. Vulnera derechos fundamentales amparados por la Honorable Corte Constitucional.*

Una autoridad administrativa no puede reinterpretar, relativizar ni corregir una sentencia de la Corte Constitucional. Esta actuación vulnera el artículo 243 de la Constitución Política y configura desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.

DECISIÓN ADOPTADA CON PARTICIPACIÓN DE TERCEROS NO COMPETENTES Y CONFLICTO DE INTERESES

- La Resolución reconoce reuniones y actuaciones con: Propietarios de la Granja Avícola La Isabella. (pág. 15) reuniones antes de reunirse con la comunidad indígena y después de una única reunión con la comunidad indígena.*
- Reuniones con funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto y por fuera de las instituciones propias de la comunidad indígena. (casa Mayor) en la misma resolución se argumenta que los funcionarios de la Alcaldía de Pasto argumentan que según lo manifestado por ellos, se debe declarar improcedente la consulta previa. Como si entre las funciones de la Alcaldía Municipal de Pasto estuviera la de decidir si es o no procedente agotar un proceso de Consulta Previa.*
- Corregidora de Mocondino, quien fue la persona que tramito conceptos ambientales ante CORPONARIÑO A favor de la empresa granja isabella.*

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

• Asociaciones campesinas. Conformadas por los mismos empresarios del proyecto GRANJA ISABELLA. Y personas extrañas a la comunidad de Mocondino. (pag. 15) como lo argumentan en la misma resolución; con asociaciones campesinas del corredor oriental. O sea, con personas de otros corregimientos del municipio de Pasto.

Ninguno de estos actores tiene competencia para decidir sobre la procedencia del derecho fundamental a la consulta previa.

a) FALSA MOTIVACIÓN POR AFIRMAR, SIN PRUEBAS, QUE EL CEMENTERIO COMUNITARIO DE TRADICION INDÍGENA DE MOCONDINO FUE ENTREGADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO.

La Resolución afirma que la Comunidad Indígena de Mocondino entregó la administración del Cementerio Comunitario De tradición Indígena a la Alcaldía Municipal de Pasto. No se aporta ningún documento probatorio, como:

- Acta de cesión
- Convenio
- Acto administrativo
- Escritura pública
- Documento suscrito por autoridad indígena competente.

Esta afirmación carece totalmente de soporte y configura falsa motivación, causal directa de nulidad del acto administrativo.

b) FALSA MOTIVACIÓN POR AFIRMAR, que el uso indiscriminado del agua, no es una actividad que afecte directamente las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud, vida y ocupacionales o fuentes de sustento de la comunidad indígena Aquí estudio de deficiencia de agua en el territorio de Mocondino adelantado por la Ingeniera Aura Eliza aza Fuelantala. Universidad del Valle.
https://drive.google.com/file/d/0B9XxPSA7WQgwejg3VjQwc2pzZVRBT1BW/RkpHSnhVanhZWnVN/view?usp=drive_link&resourcekey=0-1jkqfvBlnbepjfySipZiw

La inexistencia de afectación al acueducto comunitario, alegada por la Dirección de Consulta Previa, resulta insostenible frente a los hechos acreditados desde el inicio del proceso. Si bien el acueducto comunitario de Mocondino es administrado por una Junta de Administración del Agua integrada por miembros de la comunidad originaria —indígenas y no indígenas—, ello no neutraliza la afectación directa generada por el proyecto avícola. Según resolución ST-2242 DE 19 DE DIC 2025 expedida por la dirección de consulta previa; Al proyecto GRANJA ISABELLA Que ya está operando, se le han autorizado tres (3) llaves industriales y cinco (5) llaves familiares para el desarrollo de una explotación avícola a gran escala, sin que exista control alguno sobre los volúmenes reales de agua utilizados, mientras que a cada familia de la comunidad únicamente se le permite una llave domiciliaria y se encuentra sometida a racionamientos constantes por déficit hídrico. Esta situación se agrava al existir estudios técnicos y académicos que han evidenciado oficialmente la deficiencia estructural de agua en el territorio de Mocondino.

El uso intensivo e indiscriminado del recurso hídrico por parte de los nuevos galpones avícolas afecta de manera directa la disponibilidad, calidad y acceso al agua para la comunidad, con impactos negativos en la salud, la economía y la vida colectiva del pueblo indígena, lo cual configura una afectación directa que activa de manera obligatoria el derecho fundamental a la consulta previa, independientemente de la figura administrativa que gestione el acueducto.

FALSA MOTIVACIÓN POR EQUIPARAR LA ACTIVIDAD FAMILIAR DE SUBSISTENCIA CON GRANDES EXPLOTACIONES AVÍCOLAS Y PORCICOLAS INDUSTRIALES de propiedad de los mismos propietarios de GRANJA ISABELLA.

La Dirección de Consulta Previa fundamenta su decisión en la supuesta existencia generalizada de explotaciones avícolas y cría de especies menores por parte de todos los habitantes del corregimiento de Mocondino, utilizando este argumento como pretexto para negar la procedencia de la consulta previa. Esta afirmación es totalmente falsa y carece de verificación directa, pues en la misma resolución se reconoce que durante la visita de verificación no se realizó recorrido alguno por el territorio, por lo tanto, se basa únicamente en suposiciones. Adicionalmente, el argumento desconoce la diferencia fundamental de escala, propiedad y control entre las actividades tradicionales de la comunidad indígena y los proyectos industriales a gran escala. La Comunidad Indígena de Mocondino realiza únicamente cría familiar y de subsistencia, limitada a pocas especies y con fines de

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

autoconsumo. Por el contrario, los galpones avícolas y porcinos a gran escala, operados por los empresarios de la Granja Isabella, son de propiedad exclusiva de los mismos familiares de los propietarios de la Granja Isabella. y operan sin restricciones sobre el uso de recursos, como el agua, generando impactos significativos sobre la comunidad.

La resolución tampoco tiene en cuenta que hace varios años atrás las entidades sanitarias y ambientales han prohibiendo a la comunidad originaria de Mocondino, la cría de cerdos, mientras que los galpones industriales si operan sin control, afectando la disponibilidad de agua, la salud, la economía y la vida colectiva del pueblo indígena. En consecuencia, la comparación que hace la Dirección de Consulta Previa entre la actividad familiar y las explotaciones industriales es incorrecta, constituye una falsa motivación y no puede servir de fundamento para excluir la obligación de realizar la consulta previa, cuyo propósito es proteger los derechos colectivos, culturales, territoriales y ambientales del pueblo indígena de Mocondino.

Falsa motivación por percepción de conflicto social y minimización de la población indígena

La Dirección de Consulta Previa ha fundamentado su decisión en la supuesta “distorsión de la realidad social” en el corregimiento de Mocondino, señalando un desajuste entre el juicio judicial y la realidad étnica del territorio, así como expresiones de inconformidad de la población no indígena frente a la Sentencia T-12 de 2025. Este argumento constituye una falsa motivación, por cuanto confunde la inconformidad de algunos sectores sociales con la inexistencia de afectación directa a los derechos colectivos de la comunidad indígena. La inconformidad de la Asociación Campesina y de otros habitantes no indígenas no elimina la obligación constitucional de realizar consulta previa ni puede justificar la negación de derechos ya reconocidos, como la titularidad, el uso y la administración del territorio.

De manera adicional, la DCP argumenta que la consulta no sería procedente porque la mayoría de la población de Mocondino no se ha auto reconocido como indígena, desconociendo que los derechos colectivos se aplican al pueblo indígena como grupo social y cultural, sin depender de su proporción dentro de la población total. Por el contrario, la existencia de un número reducido de miembros auto reconocidos refuerza la obligación de protección, dado que cualquier afectación a sus recursos, economía, espiritualidad, territorio o prácticas culturales podría poner en riesgo la supervivencia de la cultura Mocondina. Negar la consulta en estas condiciones equivaldría a permitir la extinción cultural gradual del pueblo indígena, lo cual es contrario a la Constitución, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU-123 de 2018; T-12 de 2025) y a los estándares internacionales de protección de pueblos indígenas. En consecuencia, la resolución de la Dirección de Consulta Previa, al basarse en percepciones subjetivas sobre la reacción de actores sociales y en la proporción de población indígena, incurre en vicio de motivación y valoración defectuosa de la realidad étnica, desconociendo la obligación constitucional de proteger los derechos colectivos, culturales, territoriales y ambientales del pueblo indígena de Mocondino frente a proyectos que podrían generar afectaciones directas y significativas.

Vicio de competencia y desconocimiento de los derechos territoriales históricos de Mocondino

La dirección de Consulta Previa incurre en un grave vicio al asumir criterios sobre la titularidad y los límites del territorio indígena de Mocondino, al sugerir que la propiedad individual de microfundios o la coexistencia con territorios campesinos invalidarían los derechos colectivos. Es necesario recordar que, de forma dolosa, en 1952 el Estado colombiano, mediante la Resolución 12 del Ministerio de la Economía, pretendió suprimir y desconocer la existencia legal del resguardo de Mocondino, declarando a sus habitantes como colonos y otorgándoles títulos de propiedad privada. Sin embargo, la Constitución de 1991 y la jurisprudencia constitucional han protegido y reforzado expresamente los derechos históricos de los resguardos de origen colonial y republicano, declarando los territorios indígenas inalienables, imprescriptibles e inembargables. A diferencia de los territorios campesinos, que son medidas administrativas de corta duración y limitadas por la ley, los derechos territoriales indígenas tienen carácter constitucional y superior, y la existencia de medidas campesinas no puede interferir ni deslegitimar los territorios indígenas, dado que la normativa establece expresamente que donde existe un territorio indígena no se puede constituir un territorio campesino.

En consecuencia, la Dirección de Consulta Previa no tiene competencia para reconocer o desconocer territorios indígenas o campesinos, ni para valorar la titularidad histórica de los resguardos. Pretender negar la consulta previa o desconocer derechos colectivos sobre la base de criterios administrativos o de titularidad individual constituye un vicio de motivación,

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

de competencia y de valoración jurídica, contrario a la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales de protección de pueblos indígenas.

Falsa motivación y vulneración de la identidad histórica del pueblo indígena de Mocondino

aquí resolución 12 de enero de 1948. <https://drive.google.com/file/d/106kCkVw5dfPI2KW35JjWQKrFeRMZRHNF/view?usp=sharing> Históricamente, la comunidad originaria de Mocondino es de raigambre indígena, como lo reconoce el artículo tercero del resuelve de la Resolución 12 de 1948 del Ministerio de la Economía, que documenta la existencia y titularidad del resguardo indígena. Posteriormente, el Estado colombiano, a través de sus políticas expansionistas, declaró a las comunidades indígenas como comunidades campesina y colonos de las tierras ocupadas históricamente, y claro a partir de la expedición de esta resolución nos declaró propietarios privados. Sin embargo aún existen propiedades colectivas que al actual estado colombiano le duele reconocer, generando un proceso de invisibilización cultural que ha llevado incluso a que miembros de las comunidades indígenas se avergüencen y renieguen de su condición originaria. La Dirección de Consulta Previa, al asumir criterios que disminuyen la relevancia de los derechos colectivos, la titularidad histórica y la administración de espacios culturales, reproduce los mismos efectos de negación y deslegitimación de la identidad indígena que históricamente ha ejercido el Estado. Este tipo de motivación constituye un vicio de valor y de valoración histórica, pues ignora que la protección de los pueblos indígenas no depende del reconocimiento social mayoritario ni de políticas históricas erradas, sino de la obligación constitucional de garantizar la pervivencia de la cultura, la identidad y los derechos colectivos de las comunidades originarias de Mocondino.

USO SESGADO Y SELECTIVO DE PRUEBAS (PARCIALIDAD PROBATORIA) La Resolución:

- Publica registros fotográficos de reuniones con el ejecutor del proyecto, autoridades municipales y asociaciones campesinas.
- Omite dar el mismo valor probatorio a la versión y testimonios aportados por la comunidad, y sin ningún reparo reconoce que no se desarrolló los recorridos solicitados y exigidos por la comunidad indígena de Mocondino. Esta selección probatoria:
- Vulnera el principio de imparcialidad
- Afecta el debido proceso administrativo
- Desconoce el enfoque diferencial indígena

MINIMIZACIÓN Y DISTORSIÓN DE LAS AFECTACIONES (FALSA CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS)

La Resolución reduce lo amplio y grave de afectaciones culturales y territoriales a una supuesta “discusión por el ingreso de una volqueta”. Esta afirmación es falsa. La acción de tutela se fundamentó en: • Afectaciones ambientales graves que atentan contra la salud de los habitantes originarios del sector donde de forma arbitraria se les impuso unos grandes galpones de explotación avícola • Consumo indiscriminado de agua y contaminación en los nacimientos de agua • Impactos sobre el cementerio indígena, contaminación ambiental, libre movilidad, proliferación de aves carroñeras, roedores, insectos, presencia de cadáveres de aves y muchos otros más. • Vulneración espiritual y territorial La Corte Constitucional no habría ordenado un trámite de certificación por un hecho anecdótico. Aquí perfil vial, entrada principal cementerio comunitario, expedido por secretaria de planeación Municipal de pasto. https://drive.google.com/file/d/1GXnl_91VLeZorhbGynZC4oTJ4o_mnAw/view?usp=drive_link

ERROR GRAVE DE HECHO SOBRE LA ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO

La Resolución sostiene que la Granja Avícola La Isabella opera desde hace más de 40 años. Afirmación totalmente falsa. Según el Registro de Instrumentos Públicos: • El predio fue adquirido por el actual propietario en el 1018. Aquí certificado de libertad y tradición. A nombre del señor JONH JAIRO RIASCOS RUANO. Propietario de la granja isabella. https://drive.google.com/file/d/1Y66B5f29m0ApR8-n8yhMAg8eJsYoFGeU/view?usp=drive_link • Los galpones fueron construidos hace 2 años. Aquí registro fotográfico de Google map. Año 2014. Del lote donde hoy esta construidos los grandes galpones de granja isabella. Hasta 2014. Solo existe construida una vivienda y un cultivo de papa. No coinciden los supuestos 40 años de existencia de la granja isabella. https://drive.google.com/file/d/1crW4Ni2ubQDzyijXUF_VfncCCJd5c8zF/view?usp=drive_link

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

Este error incide directamente en la valoración de la afectación y configura falsa motivación y error grave de hecho.

OMISIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES DIRECTAS Y ACEPTACIÓN EXPRESA DE CONTAMINACIÓN

La Resolución omite analizar hechos ambientales graves y verificables, entre ellos:

- *Construcción de galpones junto a 40 viviendas del sector. Como se puede evidenciar en especial de Pasto Noticias enlace al inicio de este documento.*
- *Disposición de cadáveres de gallinas en predios aledaños y cercanos al cementerio. Registro fotográfico aportado en este documento.*
- *Proliferación de aves carroñeras (gallinazos) en viviendas y en el cementerio comunitario de tradición Indígena la Inmaculada concepción de Mocondino.*
- *Construcción de pozos de aguas usadas junto a los linderos del cementerio.*

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y CARGA PROBATORIA INDEBIDA

La Dirección:

- *No aplica el principio de precaución.*
- *Exige implícitamente prueba técnica plena a la comunidad indígena de Mocondino. toda vez que las pruebas técnicas y estudios se obtienen en el marco de consulta previa para luego mitigar los impactos medidos con estudios técnicos.*
- *En esta misma resolución han confirmado los funcionarios de la dirección de consulta previa QUE NO HICIERON NINGÚN RECORRIDO POR SUPUESTA FALTA DE SEGURIDAD; En reunión a puerta cerrada Aceptan sin ningún tipo de verificación la versión hablada del ejecutor del proyecto. En consulta previa basta el riesgo razonable de afectación, no la certeza científica.*

FALSA MOTIVACIÓN SOBRE SUPUESTOS ROBOS Y CERRAMIENTO IRREGULAR

La Resolución justifica el cerramiento del predio por supuestos robos y pérdidas. Sin embargo, oficialmente no existe un documento de:

- *Denuncia penal ante la autoridad competente.*
- *Informe policial o un inventario real de lo supuestamente perdido, solo especulaciones y suposiciones.*
- *Soporte de autoridad competente Además, el Curador Urbano Segundo de Pasto, dentro del trámite de tutela, manifestó que:*
- *No ha expedido licencia de construcción ni de cerramiento.*
- *Solo se otorgó licencia para demolición de una vivienda. Omitir esta información oficial configura ocultamiento de prueba relevante.*

OMISIÓN DE LA AFECTACIÓN AL ACCESO DEL CEMENTERIO Y DESCONOCIMIENTO DEL POT

La Resolución no analiza que: • *La entrada al Cementerio Comunitario Indígena quedó reducida a 2,50 metros.*

- *Cuando el Plan de Ordenamiento Territorial vigente exige: 4,50 metros de calzada 0,50 metros de andén a cada lado Esta reducción afecta el acceso digno, la libre movilidad, la espiritualidad y los rituales funerarios. Así sean uno empresarios con grandes capitales económicos y empresas en varios municipios del departamento de Nariño, están obligados a cumplir la norma. Y los funcionarios públicos como corregidores, policía o alcaldes Municipales están en la obligación de hacer cumplir el Plan de ordenamiento Territorial. Vigente.*

CONCLUSIÓN ARBITRARIA SIN RECORRIDOS TERRITORIALES CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCONDINO

La propia Resolución reconoce que:

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

- Dentro del territorio, No se realizó ningún recorrido. Por una supuesta falta de seguridad. Todo se decidió desde las oficinas del ejecutor del proyecto. Y oficinas de la alcaldía municipal. Aun así, concluye de manera definitiva que:
- No existen afectaciones
- No procede la consulta previa

Esto viola el debido proceso, el enfoque diferencial y la finalidad preventiva de la consulta previa.

DESCONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCONDINO

Finalmente, la Resolución desconoce gravemente el territorio geográfico, social, cultural y espiritual de nuestra comunidad indígena de Mocondino al descartar el cementerio como un lugar sagrado con base en criterios meramente formales y claramente insuficientes.

En particular, fundamenta su decisión en que el cementerio es de uso compartido entre personas indígenas y no indígenas, en que su administración es mixta y en una supuesta vocación pública o municipal del predio.

Este razonamiento reduce el territorio a categorías administrativas de uso, propiedad o gestión, e ignora que el carácter compartido del cementerio entre personas originarias de Mocondino que se autor reconocen o no como indígenas, no desvirtúa, sino que reafirma, su centralidad como espacio cultural, espiritual y ancestral para la comunidad indígena de Mocondino.

Con ello, la Resolución desconoce abiertamente los criterios desarrollados por la Corte Constitucional y reiterados en la sentencia T-012 de 2025, que debían ser observados rigurosamente por el Ministerio del Interior, en la cual se establece que: “el concepto de territorio de las comunidades étnicas trasciende el espacio físico (concepto geográfico de territorio) y se vincula a elementos culturales, ancestrales, así como espirituales (concepto amplio de territorio), de manera que no es posible equiparlo al concepto de propiedad del derecho civil”. Pero más grave aún, este razonamiento deja sin efecto los testimonios rendidos por la comunidad Indígena de Mocondino durante las entrevistas realizadas en el marco del procedimiento, así como por los líderes de la Junta del Cementerio, todos ellos originarios de Mocondino.

En dichos testimonios se señaló de manera clara y reiterada que el Cementerio “La Concepción” fue establecido por el Cabildo indígena de Mocondino, que constituye un bien comunitario de los Mocondinos y que es un lugar religioso y cultural central para la comunidad indígena.

De esta manera, la Resolución excluye del análisis el aspecto central sobre el cual versa la solicitud de consulta previa presentada por el Cabildo Indígena de Mocondino: la afectación directa a un lugar sagrado que hace parte constitutiva de nuestro territorio.

Sumado a lo anterior, la decisión final se funda en la afirmación de que “NO HAY coincidencia de los contextos del proyecto y de la comunidad étnica visitada, dado que no se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de esta comunidad étnica que puedan verse posiblemente afectadas por la ejecución de las actividades del proyecto”. Resulta incomprensible cómo se arriba a esta conclusión cuando la Granja La Isabela colinda directamente con el cementerio, lo que implica afectaciones derivadas de los malos olores, los desechos generados por la operación industrial, la obstrucción del camino tradicional y el funcionamiento permanente de una industria junto a un lugar sagrado donde reposan nuestros ancestros. Esto es un escenario razonable de posible afectación, suficiente para activar el deber de consulta previa conforme al principio de precaución.

3. PETICION DEL RECURRENTE

“REPONGA la Resolución NÚMERO ST-2242 DE 19 DE DIC 2025de 2025, “por medio de la cual se certificó la NO procedencia de consulta previa respecto del proyecto Granja Avícola La Isabella, en el corregimiento de Mocondino, municipio de Pasto”.

1. En su lugar, DECLARE la procedencia de la consulta previa con la Comunidad Indígena de Mocondino respecto del proyecto Granja Avícola La Isabella.
2. Subsidiariamente, ORDENE rehacer el trámite de certificación, garantizando:
 - a) Participación efectiva de la comunidad indígena

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

- b) Imparcialidad*
- c) Aplicación del principio de precaución*
- d) Recorridos territoriales reales*
- e) Observancia estricta de la Sentencia T-012 de 2025*
- f) Valoración verídica, clara y objetiva de pruebas aportadas.*

El derecho fundamental a la consulta previa es un derecho fundamental y constitucional. Amparado en el artículo 6 de la ley 21 de 1991, ley de rango constitucional.”

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS PARA RESOLVER

Con base en los antecedentes expuestos, se procederá a desarrollar el análisis particular de procedencia del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST-2242 del 19 de diciembre de 2025, que determinó la no procedencia de la consulta previa, para las actividades y características que comprenden el proyecto **“PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”**

4.1. COMPETENCIA

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un proyecto, obra o actividad (en adelante POA), medida legislativa o administrativa, la participación previa, libre e informada sobre el proyecto o medida que se pretenda realizar, buscando que de manera conjunta y participativa se identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con el fin de salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

4.1.1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.

4.1.2. Específicamente el artículo 4 que modificó el artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 1140 de 2018, que señala las funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior:

“1. Impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas”.

Es así como dentro de la competencia fijada por la ley a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se pueden resumir entre otras en:

- La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa.
- Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias que han sido fijadas de manera única y exclusiva a esta Autoridad del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

4.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO.

Desde el punto de vista general, los recursos contra las actuaciones administrativas entre ellos el de reposición, constituye un medio jurídico mediante el cual se controvierte por la parte interesada y/o reconocida en el proceso, los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que la administración analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, confirmar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual se deben acatar rigurosamente los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículos 74 y siguientes, los cuales expresan:

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

(...)“

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. *“Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.*

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”

ARTÍCULO 77. REQUISITOS. *Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.*

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.”

En toda actuación administrativa que se surta ante esta Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, debe respetarse el valor de los principios que orientan las relaciones entre el Estado y los particulares. Así las cosas, el contenido y motivación del acto administrativo recurrido, atiende al principio de sujeción a la ley en desarrollo del principio de legalidad y en armonía con los fines del Estado Social de Derecho.

En ese sentido, el precitado código establece:

“Artículo 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

(...)

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.

Así las cosas, en relación con los requisitos formales del escrito del recurso de reposición que deben observarse, en el presente caso se concluye:

- a. El recurso se interpuso por escrito y está dirigido a la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
- b. En cuanto a la oportunidad legal para interponer el recurso, se tiene que, una vez verificados los canales de correspondencia y recepción de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se constató que la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre del 2025 se notificó el 22 de diciembre de 2025.
- c. Conforme a lo anterior, el recurso de reposición se interpuso por medio de correo electrónico el 06 de enero del 2026, cumpliendo así con el término otorgado.
- d. El recurrente radicó el recurso de reposición, y expuso la inconformidad en la decisión emitida expresando las razones por las cuales considera que debe revocarse la decisión adoptada.
- e. Teniendo en cuenta que el recurso de reposición en subsidio de apelación fue presentado por el señor SILVIO NASPIRÁN JOJOA en calidad de Gobernador Cabildo indígena de Mocondino, se encuentra que fue presentado por la persona idónea.
- f. Por último, el recurrente indicó la dirección de notificación, en este caso, el correo electrónico donde este Despacho puede notificar la presente decisión, a saber: cabildomocondino@gmail.com y silvionaspiran@gmail.com

En toda actuación administrativa que se adelante ante la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, deben observarse los principios que rigen las relaciones entre el Estado y los particulares. En tal sentido, el contenido y la motivación del acto administrativo recurrido se encuentran orientados por el principio de legalidad, en armonía con los fines del Estado Social de Derecho.

4.3. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA Y AFECTACIÓN DIRECTA.

4.3.1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN:

La jurisprudencia ha identificado tres niveles de participación de las comunidades étnicas, de la siguiente manera:

- (i) la simple participación en igualdad de condiciones al resto de personas, asociada a la intervención de las comunidades en los órganos decisorios de carácter nacional, así como en la incidencia que, a través de sus organizaciones, pueden ejercer en los escenarios de su interés.
- (ii) La consulta previa, que implica que las comunidades deben ser consultadas y escuchadas frente a cualquier medida que las afecte directamente.
- (iii) El consentimiento previo, libre e informado, que opera cuando la medida (norma, programa, proyecto, plan o política) produzca una afectación intensa de sus derechos, principalmente, de aquellos relacionados con el territorio o amenace la subsistencia de la comunidad.

Así, las modalidades de participación de estas comunidades son diversas y su escogencia “*depende del avance y de la trascendencia de la medida a implementar*”, en armonía con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

4.3.2. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.

La Corte Constitucional ha reiterado de manera uniforme que la consulta previa *“es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales, rom, afrodescendientes y raizales”*, el cual está condicionado a la existencia de una *“afectación directa, actual y diferenciada de tales comunidades”*.

En particular, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que, con fundamento en el artículo 6.1 (a) del Convenio 169 de la OIT, la consulta es un derecho que garantiza la preservación de la *“identidad como minoría étnica y cultural de las comunidades] organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales”*. Para lograr ese objetivo, la consulta debe ser *“oportuna y eficaz”*, asegurar *“una participación activa y efectiva de los pueblos interesados”* y, por último, adelantarse a la luz del *“principio de buena fe”*.

La finalidad de la consulta previa es *“intentar genuinamente lograr un acuerdo con las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre medidas que las afecten directamente”*.

4.3.3.LA AFECTACIÓN DIRECTA

En la Sentencia SU-121 de 2022, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que los pronunciamientos que emita la DANCP deben estar dirigidos a determinar la existencia o no de una afectación directa a las comunidades.

La afectación directa es condición necesaria de la consulta previa. El derecho a la consulta previa *“se encuentra condicionado a la existencia de una afectación directa para el desarrollo de la comunidad étnica”*.

La afectación directa consiste en el *“impacto positivo o negativo [de] una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica”*.

Así, la consulta procederá cuando exista *“evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente de forma directa, actual y diferenciada”*.

En la Sentencia SU-123 de 2018, la Corte señaló algunos escenarios en los que existiría afectación directa de las comunidades étnicas, cuando:

“(i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio.”

Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede:

“(v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido”.

4.4. ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL APLICABLE AL DEBER DE CONSULTA PREVIA

El artículo 330 de la Constitución Política, en armonía con el Convenio 169 de la OIT, establece la obligación estatal de garantizar la consulta previa cuando se prevean medidas susceptibles de afectar directamente a comunidades étnicas.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-123 de 2018, unificó la jurisprudencia sobre el alcance del derecho, señalando que la consulta previa procede cuando concurren los siguientes elementos:

1. Existencia de una comunidad étnicamente diferenciada.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

2. Identificación de una medida administrativa o legislativa.
3. Susceptibilidad de afectación directa sobre la comunidad.
4. Incidencia específica y diferenciada en sus derechos colectivos.

En dicha providencia se precisó que la afectación directa no se presume por la mera proximidad geográfica, sino que debe acreditarse una incidencia concreta, particular y diferenciada respecto de la comunidad.

En igual sentido, la Sentencia T-129 de 2011 ha establecido que:

“corresponde realizar consulta previa ante medidas administrativas o proyectos que tengan la potencialidad de afectar, o que han afectado, territorios de comunidades étnicas y consecuentemente sus derechos asociados a identidad, integridad cultural y social...”

Por lo tanto, el criterio determinante es la existencia de un impacto directo en las prácticas culturales, económicas, espirituales o territoriales de la comunidad, y no simplemente la ubicación del proyecto dentro de un mismo municipio o área general.

5. DEL CASO EN CONCRETO

En el presente acápite, se procederá a resolver de plano los argumentos expuestos por el señor SILVIO NASPIRÁN JOJOA en calidad de Gobernador Cabildo indígena de Mocondino.

Para tal efecto, se analizarán los motivos de inconformidad planteados por el recurrente en donde solicita se reponga la Resolución No. ST-2242 del 19 de diciembre de 2025 y en su lugar declarar la procedencia de la Consulta Previa, argumentando la existencia de una posible afectación directa.

5.1. DESCONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA T-012 DE 2025 Y DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

El recurrente considera que esta Autoridad desconoció y se apartó de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2015, frente a lo anterior es necesario recordar lo resuelto por la Corte en la sentencia referida:

*“**Primero. REVOCAR** la Sentencia del 26 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto, en primera instancia; y la Sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Penal del circuito de Pasto, en segunda instancia, que declararon improcedente la acción de tutela. En su lugar, **CONCEDER** el amparo del derecho fundamental a la consulta previa y al territorio de la comunidad indígena de Mocondino.*

Segundo. ORDENAR** al Ministerio del Interior que, en coordinación con las entidades competentes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia **inicie el trámite administrativo de certificación de procedencia de consulta previa para el proyecto de granja avícola “la Isabella” dentro del Corregimiento de Mocondino de la ciudad de Pasto. Este trámite inicial deberá completarse con la expedición del respectivo acto administrativo, debidamente motivado, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia.

Dicho trámite, y el acto administrativo que resulte del mismo, deberá adelantarse teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia, particularmente las relacionadas con la (i) adecuada coordinación con las entidades de ordenamiento territorial; (ii) la participación de la comunidad indígena; y (iii) la motivación suficiente del acto administrativo de certificación, considerando los criterios de afectación enunciados en este fallo.

El mecanismo de la consulta tendrá el propósito de determinar los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales de la operación de la granja avícola sobre la comunidad indígena de Mocondino; y proponer medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar y/o reparar las afectaciones que puedan identificarse. En caso de no llegar a un

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

acuerdo entre las partes, las decisiones que se adopten en el trámite de consulta deberán ser ponderadas.

Frente a lo anterior, se evidencia que lo ordenado por la Corte Constitucional en el numeral segundo consiste en iniciar el trámite y expedir el respectivo acto administrativo de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, orden la cual se cumplió con la expedición de la resolución ST-2242 del 19 de diciembre de 2025, lo cual desvirtúa claramente el argumento del recurrente dado que la orden fue clara y esta Autoridad procedió al cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.

5.2. DECISIÓN ADOPTADA CON PARTICIPACIÓN DE TERCEROS NO COMPETENTES Y CONFLICTO DE INTERESES.

El recurrente manifiesta su descontento por las reuniones que se adelantaron con el ejecutor del proyecto antes de la reunión con la comunidad, reuniones con la Alcaldía Municipal de Pasto, Corregidora de Mocondino y con las Asociaciones Campesinas, frente a lo anterior es importante dividir la razón de las reuniones de la siguiente manera:

- Pertinencia de la reunión con la Alcaldía Municipal y con la Corregidora de Mocondino: En este apartado es importante inicialmente recordarle al recurrente que la misma sentencia T-012 de 2025 estableció en su numeral segundo lo siguiente:

*Dicho trámite, y el acto administrativo que resulte del mismo, **deberá adelantarse teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia, particularmente las relacionadas con la (i) adecuada coordinación con las entidades de ordenamiento territorial; (ii) la participación de la comunidad indígena; y (iii) la motivación suficiente del acto administrativo de certificación, considerando los criterios de afectación enunciados en este fallo.***

En este entendido, es claro que parte del cumplimiento del fallo constitucional debía realizarse con la adecuada coordinación con las entidades de ordenamiento territorial, la cual teniendo en cuenta que tanto el proyecto como la comunidad étnica habitan el municipio de Pasto, era procedente realizar las reuniones necesarias con la Alcaldía Municipal de Pasto a través de sus funcionarios y fruto de dicha reunión, se estableció la necesidad de la reunión con la autoridad administrativa del corregimiento que corresponde a la Corregidora de Mocondino.

- Pertinencia de la reunión con la organización campesina: Es necesario aclarar que la reunión con la asociación campesina no fue fruto de un capricho de esta Autoridad, sino que fue el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto mediante Auto núm. 257 del 16 de junio de 2025, el cual ordenó:

5.- REQUERIR al MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, para que, en el marco de la visita de verificación programada para los días 17 al 20 de junio de 2025, garantice un espacio de diálogo efectivo a la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO (ASOCCAMO).

Así las cosas, es claro que esta Autoridad es respetuosa de las órdenes judiciales y por tal motivo, procedió a garantizar el espacio de diálogo con la Asociación Campesina del Corregimiento de Mocondino (ASOCCAMO).

- Pertinencia de la reunión con el ejecutor del proyecto: Es importante recordar que, en los procedimientos de consulta previa, que inician desde la determinación de procedencia de la consulta previa, siempre se han reconocido unos actores que son los ejecutores de los proyectos y las comunidades étnicas.

En este entendido, es claro que ambas partes que se encuentran involucradas en el trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, deben participar del trámite correspondiente, situación que fue conocida por la comunidad étnica desde antes de la realización de la visita de verificación, dado que desde la

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

convocatoria realizada mediante el Radicado 2025-2-002410-020008 Id: 550409 del 3 de junio de 2026, se convocó tanto al ejecutor como a la comunidad étnica y que dada la solicitud de la comunidad esta Autoridad actuó de puente para que las partes llegaran a un acuerdo frente a la logística de la visita de verificación a realizarse, tal como se consigno en los antecedentes de la resolución recurrida a saber:

“1.8. Que por solicitud de la Comunidad indígena de Mocondino, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa actuó como puente de comunicación entre la comunidad y el ejecutor del proyecto para la coordinación de las necesidades y requerimientos logísticos para la realización de la visita de verificación.

1.9. Que la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa solicitó a la comunidad indígena de manera formal el envío de la información a través de radicado 2025-2-002410-020391 ID 551511 del 04 de junio de esta manera la comunidad respondió mediante correo electrónico enviado el 09 de junio y radicado 2025-1-002410-044712 ID 554484 del 10 de junio de 2025.

1.10. Que este Despacho respondió a la comunidad a través de radicado 2025-2-002410-021262 ID 554346 de 09 de junio de 2025 y procedió a dar traslado al ejecutor a través de radicado 2025-2-002410-021314 ID 554467 del 10 de junio de 2025.”

Por consiguiente, la comunidad étnica siempre conoció la necesidad de la participación del ejecutor del proyecto en la visita de verificación sin que se generara oposición alguna.

De conformidad con todo lo anterior, es claro que esta Autoridad frente a la participación de otras entidades y del mismo ejecutor, todo lo hizo ya sea en cumplimiento de mandatos judiciales o con pleno conocimiento de la comunidad étnica y garantizando un debido proceso.

Es de aclararle de igual manera al recurrente, que la participación de terceros en el trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, no es por que ellos tengan alguna injerencia o definición frente a la decisión adoptada por esta Autoridad, dado que en el marco del Decreto 2353 de 2019, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, es la única entidad a nivel nacional que puede decidir sobre la necesidad o no de adelantar un proceso de consulta previa y la participación de terceros es únicamente para recopilar información sobre elementos que se consideren necesarios. En resumen, esta Autoridad no evidencia en este cargo ningún elemento que prospere en esta sede de reposición.

5.3. FALSA MOTIVACIÓN POR AFIRMAR, SIN PRUEBAS, QUE EL CEMENTERIO COMUNITARIO DE TRADICION INDÍGENA DE MOCONDINO FUE ENTREGADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO.

El recurrente expresa su inconformidad, debido a que considera que es falso el argumento de esta Subdirección frente a la entrega de la administración del cementerio a la alcaldía municipal, y que dicha afirmación no cuenta con soporte alguno.

Es de resaltar que esta Autoridad entre la información probatoria que recopiló durante la visita de verificación, encontró el documento denominado “FICHA CATASTRAL DE CEMENTERIO COMUNITARIO DE MOCONDINO 52001000100000046 – 0124-000000000, en el cual se encuentran los siguientes documentos:

Acuerdo 23 de febrero de 1945: Por el cual se hace una segregación y se destina para cementerio público: En dicha resolución se logra entender que el cabildo de mocondino resuelve segregar un predio por utilidad pública e interés social por abandono de Clara Naspiran, quien se ausento de la parcialidad sin dejar marido ni hijos, resolviendo que se declare de utilidad pública para la construcción de el nuevo cementerio en el lote de terreno del resguardo para servicio del pueblo, teniendo en cuenta las condiciones higiénicas que la sanidad exigía. Todo esto, el Cabildo lo hizo en beneficio de los moradores de mocondino ósea para un bien general.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

Resolución de la solicitud de revocatoria de la resolución 26 febrero de 1945 y del acuerdo del 23 de febrero de 1945: En dicho documento se evidencia que la Alcaldía de Pasto resolvió la solicitud de revocatoria contra la resolución del 26 de febrero proferida por la Alcaldía Municipal, por medio de la cual se aprobó el acuerdo del 23 de febrero expedido por el Cabildo de Mocondino, y por la cual se declaró de utilidad publica una parte de lote de terreno denominado “EL ARRAYAN” y se le destino para cementerio de esa población. Durante dicho trámite la alcaldía resolvió declarar prescrita la acción propuesta contra la resolución del 23 de febrero de 1945 y de la resolución del 26 de febrero de 1945 aprobatoria del acuerdo del terreno “ARRAYAN” de los resguardos de Mocondino y que ha sido destinado para el cementerio de ese lugar, confirmada posteriormente en sede de apelación expedida el 14 de mayo de 1947.

En este entendido, es claro para esta Autoridad que del material documental recopilado, se encontró que el Resguardo Indígena de Mocondino en uso de sus facultades legales, segregó y destino para cementerio publico el lote “EL ARRAYAN”, actuación que fue aprobada por la alcaldía municipal mediante la resolución del 26 de febrero de 1945 y que fue sujeto de los recursos legales de la época que fueron decididos el 14 de mayo de 1947 reconociendo que el lote “EL ARRAYAN” era de utilidad pública para la construcción del nuevo cementerio teniendo en cuenta las condiciones higiénicas que la sanidad exigía.

Por lo cual, esta Autoridad si fundamento su afirmación en la documentación reglamentada y si es claro, que tanto el Resguardo Indígena de Mocondino de la época entregó el predio para la construcción de un nuevo cementerio como que la alcaldía aprobó dicha resolución mediante un acto administrativo expedido bajo el marco normativo de la época, por lo cual, este cargo no prospera.

5.4. FALSA MOTIVACIÓN POR AFIRMAR que el uso indiscriminado del agua no es una actividad que afecte directamente las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud, vida y ocupacionales o fuentes de sustento de la comunidad indígena.

Frente a lo anterior, esta Autoridad se permite inicialmente aclarar que, durante el desarrollo de la visita de verificación, no se encontró que se pueda generar un uso indiscriminado del agua por parte del ejecutor del proyecto, en atención que el uso del servicio publico depende directamente del suministro que sea establecido por la junta administradora local, en este sentido, no se evidencio ningún aprovechamiento de fuentes de agua ni concesiones de agua a favor del proyecto analizado.

Ahora bien, frente a la afectación directa, es necesario recordar que la Sentencia SU-123 de 2018, estableció como criterios de afectación directa los siguientes:

(i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.

En este entendido, esta Autoridad no evidencio como el uso de una llave de agua domestica seria capaz de perturbar estructuras sociales, espirituales, culturales en salud y ocupaciones o generar un impacto a las fuentes de sustento o imposibilitar los oficios de los que se derivan su sustento, dado que el uso del recurso hídrico se encuentra limitado a la capacidad del sistema así como de las aprobaciones que genere la junta administradora local, la cual es la encargada de definir la entrega o no de llaves de agua domesticas o industriales.

En este mismo sentido, es necesario aclarar que esta Autoridad no niega la posibilidad de que se puedan generar fluctuaciones del servicio de agua, dado que este depende directamente de la capacidad de recarga de los pozos que nutren el sistema la cual se verá

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

afectada por la época del año en que se encuentre, sin embargo, esta Autoridad debe realizar análisis bajo el criterio de proporcionalidad establecida por la misma Corte Constitucional en la Sentencia SU-123 de 2018 a saber:

Igualmente, conforme al principio de proporcionalidad, en este territorio amplio es posible que las autoridades competentes, para determinar si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en consideración la intensidad y permanencia efectiva con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, el grado de exclusividad con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción.

Esto es así por cuanto los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, no toda medida que pueda tener algún impacto en el territorio amplio de un pueblo étnico implica automáticamente que exista una afectación directa que haga exigible la consulta previa. Será necesario que las autoridades en el caso concreto, y tomando en cuenta factores como los mencionados anteriormente (grado de permanencia y ocupación exclusiva en un territorio del pueblo respectivo, sus características propias) evalúen si la medida implica realmente una afectación directa, entendida, como ya se explicó (cfr. supra Fundamento 7.2.), como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. El análisis de estos elementos, de intensidad, permanencia o exclusividad, debe guiarse por un enfoque étnicamente diferenciado en la valoración de la afectación directa. Igualmente, para realizar dicho análisis y evaluación, la Corte considera que resulta particularmente relevante lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.

En este orden de ideas, durante la visita de verificación, no se encontró que el sistema de agua sea exclusivo de la comunidad étnica, dado que es administrado por una Junta Administradora del Corregimiento y el servicio es para todos los pobladores, tampoco tienen un uso ni permanente ni intenso, dado que el uso es general de todos los pobladores conectados al sistema y dependerá del tipo de llave aprobada por la Junta Administradora.

En conclusión, la invocación genérica de impactos por parte del recurrente, sin demostrar su incidencia concreta, particular y diferenciada sobre las dinámicas colectivas del colectivo étnico, no puede prosperar como fundamento para declarar la procedencia de la consulta previa, toda vez que el criterio de afectación directa establece es la existencia de un impacto diferenciado, cosa que no ocurre en el presente caso.

5.5. FALSA MOTIVACIÓN POR EQUIPARAR LA ACTIVIDAD FAMILIAR DE SUBSISTENCIA CON GRANDES EXPLOTACIONES AVÍCOLAS Y PORCICOLAS INDUSTRIALES de propiedad de los mismos propietarios de GRANJA ISABELLA.

Como primer elemento es necesario aclarar al recurrente que el análisis realizado por esta Autoridad corresponde específicamente al “proyecto de granja avícola “la Isabella””, en este entendido los demás proyectos de avicultura o porcicultura que pueden existir en la zona no fueron objeto de análisis.

Dicha afirmación guarda total relación con lo ordenado por la Sentencia T-012 de 2025, en atención que el numeral segundo fue claro al establecer:

Segundo. ORDENAR al Ministerio del Interior que, en coordinación con las entidades competentes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia inicie el trámite administrativo de certificación de procedencia de consulta previa para el proyecto de **granja avícola “la Isabella”** dentro del Corregimiento de Mocondino de la ciudad de Pasto. Este trámite inicial deberá completarse con la expedición del respectivo

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

acto administrativo, debidamente motivado, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia.” (negrilla por fuera de texto)

Por lo cual, el recurrente no puede pretender que el análisis sea en otros proyectos que estuvieron por fuera de lo analizado y decidido por la Corte Constitucional.

Ahora bien, frente al proyecto analizado, no es cierto que esta Autoridad no visitara el área donde se desarrollan las actividades de la Granja Avícola, dado que si se realizó una visita en el sitio, dado que era necesario revisar lo alegado por la comunidad en la acción de tutela frente a los supuestos olores y desechos, por parte de esta Autoridad, se precisa que no se evidenciaron olores ajenos a la actividad comercial, tampoco se evidenciaron desechos de la granja diferentes al giro normal, de igual manera, se constató en la visita que los desechos son eliminados de conformidad con los horarios establecidos por el servicio de aseo municipal y se cuenta con zonas de depósito en caso de requerir la asistencia de empresas de manejo de residuos, en suma, se revisó la documentación adicional donde se encontró:

- CERTIFICACION ICA COMO GRANJA BIOSEGURA.
- REGISTRO SANITARIO DE PREDIO PECUARIO – RSPP
- RESULTADOS DE LA VISITA TECNICA DE CORPONARIÑO DONDE CONCLUYERON: No se aprecian olores ofensivos dentro del área que se encuentra en remodelación, no se evidencian focos de generación de vectores como ratones, ratas, moscos y mosquitos, en el área de los galpones que se encuentran en funcionamiento no se encuentran evidencias de olores molestos, generación de vectores y no se realizan vertimientos de aguas residuales.

No encontrándose ningún elemento al interior de la granja avícola que pueda desprender alguna afectación directa al colectivo étnico, es de aclarar que esta Autoridad no busca comparar las actividades comerciales con las de consumo de los pobladores de mocondino, sino que realiza valoraciones de la situación territorial, encontrando que Mocondino al ser una zona rural tiene cría de gallinas, cuyes y cerdos en los diferentes predios, lo que permite realizar un contexto claro de la zona donde se ejecuta el proyecto.

Por todo lo anterior y dado que el recurrente no presente ninguna prueba que permita presumir la existencia de una posible afectación directa en este aparte, no se evidencia ninguna falencia con el análisis realizado.

5.6. FALSA MOTIVACIÓN POR PERCEPCIÓN DE CONFLICTO SOCIAL Y MINIMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

Frente a este punto, es necesario aclarar que, dentro del análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa realizado por la Subdirección Técnica, uno de los primeros pasos a realizarse, consiste en entender el contexto donde se desarrolla el proyecto y donde habita la comunidad étnica, esto son las características propias que se presentan en un determinado corregimiento, vereda o municipio.

Frente a lo anterior, esta Autoridad encuentra que el corregimiento de mocondino es un sitio donde habita población tanto étnica como no étnica, en este entendido se logró evidenciar un conflicto entre la población campesina y la étnica el cual no es una mera percepción, es de resaltar que esta Autoridad recibió el 17 de junio de 2025 documento denominado “Contextualización y oposición al certificado de viabilidad sobre consulta previa en el corregimiento de Mocondino en bienes de propiedad colectiva que no pertenecen a comunidades étnicas” en donde la Asociación Campesina, consigno lo siguiente:

- Que la corte constitucional omitió la verificación de los hechos reales que dieron fundamento a la sentencia, generando una sentencia desde el escritorio que desconoce en toda medida los derechos de las personas que habitan en el territorio.
- Que esta decisión se base en la supuesta protección del Cabildo de Mocondino frente al cementerio de Mocondino, argumentando que el mismo pertenece a este grupo étnico, lo mismo se argumenta frente a las fuentes hídricas del corregimiento.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

- *Que el cementerio se creo con el esfuerzo de toda la comunidad del corregimiento de Mocondino, de igual forma su mantenimiento se hace a través de mingas y aportes de todos sus afiliados y que en ninguna medida es un cementerio de carácter étnico como se argumento en dicha sentencia.*
- *Que permitir la consulta sobre bienes e instituciones que se crearon a partir del esfuerzo de toda la comunidad rural y campesina del corregimiento de Mocondino, genera el desplazamiento de la comunidad campesina y rural de los bienes comunitarios que se han construido y mantenido con tanto esfuerzo*

De igual manera, la ASOCIACIÓN CAMPESINA CORREGIMIENTO DE MOCONDINO – ASOCCAMO, presentó acción de tutela en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PASTO, con radicado 52001-31-21-001-2025-00069-00, donde se presentaron los siguientes hechos:

“DECIMO PRIMERO. - La situación generada por la sentencia t-012 de 2025, expediente t-103509984, ha generado inconvenientes entre la comunidad campesina y las comunidades indígenas, que se hace necesario dirimir con la presencia de las dos comunidades, puesto que, ante la presunta vulneración de los derechos de los campesinos como sujetos de derechos, quienes estamos siendo víctimas de desplazamiento y amenazas se requiere la intervención de las autoridades del estado. Lastimosamente la apatía por parte de las diferentes entidades puede desencadenar hechos de violencia, que con una intervención oportuna del estado se pueden prevenir.

DECIMO SEGUNDO. – Hemos tocado las puertas de todas las entidades del estado que creemos pueden ayudar a esclarecer la situación de nuestro territorio campesino, pero ante la negativa estaremos llamados a hacer uso de las vías de hecho, y no permitir el ingreso de ninguna autoridad, hasta tanto se garantice nuestros bienes y derechos. Pues como se ha manifestado en el derecho de petición el origen de la consulta previa tiene fundamento en hecho falsos que se hace necesario su aclaración, y si bien existe comunidad indígena ellos no tienen injerencia en nuestro territorio.”

Así las cosas, es claro que esta Autoridad no llegó a una percepción, sino que queda claro que se mencionaron incluso las vías de hecho en territorio con ocasión de la visita de verificación, sin embargo, todo esto simplemente hace un contexto territorial que esta Autoridad debe analizar, ponderar y consignar en su acto administrativo, mas no es el criterio determinante para la procedencia o no de la consulta previa.

Es de recordarle al recurrente que esta Autoridad determina o no la procedencia de la consulta previa, con ocasión de los criterios establecidos en la sentencia SU-123 de 2018, no encontrando en la visita de verificación ningún elemento que permita inferir la existencia de posibles afectaciones directas con motivo de la ejecución del “proyecto de granja avícola “la Isabella””.

5.7. VICIO DE COMPETENCIA Y DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS TERRITORIALES HISTÓRICOS DE MOCONDINO.

Frente a este cargo, esta Autoridad debe indicar que tal como expresa el recurrente, la Subdirección Técnica no es la competente para expedir juicios de valor sobre la situación territorial, en este entendido consultadas las bases de datos cartográficas de la Agencia Nacional de Tierras, no se evidencia la existencia del Resguardo Indígena de Mocondino, en este entendido se tuvo como elemento probatorio la Resolución 12 del 20 de enero de 1948 expedida por el Ministerio de la Economía Nacional el cual resuelve lo siguiente:

PRIMERO: Declárese que el llamado Resguardo de Mocondino, situado en Municipio de PASTO, Departamento de Nariño, carece de la titulación necesaria para tener la calidad de Resguardo de Indígenas y que, en consecuencia, sus terrenos no han salido todavía del patrimonio del Estado.

En atención a lo anterior, el análisis realizado por esta Autoridad versó sobre una comunidad sin territorio colectivo a lo cual la sentencia SU-123 de 2018 estableció lo siguiente:

Con tales derroteros la jurisprudencia constitucional ha reconocido dos conceptos de territorio, a saber: i) el geográfico, que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo^[94] u otras figuras semejantes, como la de territorios colectivos de las

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

comunidades afro descendientes; y ii) el territorio amplio, que incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales.

8.8. La Corte entiende que la noción de territorio amplio implica posibilidades de situaciones complejas e incluso territorios complejos. Por eso, para determinar el alcance de este territorio amplio y si procede la consulta previa por efecto de la posibilidad de afectación directa por una determinada medida, las autoridades deben tomar en consideración en el caso concreto los elementos económicos, culturales, ancestrales, espirituales que vinculan a un pueblo étnico a un determinado espacio como soporte material de su existencia y diversidad cultural.

Igualmente, conforme al principio de proporcionalidad, en este territorio amplio es posible que las autoridades competentes, para determinar si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en consideración la intensidad y permanencia efectiva con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, el grado de exclusividad con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción.

Esto es así por cuanto los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, no toda medida que pueda tener algún impacto en el territorio amplio de un pueblo étnico implica automáticamente que exista una afectación directa que haga exigible la consulta previa. Será necesario que las autoridades en el caso concreto, y tomando en cuenta factores como los mencionados anteriormente (grado de permanencia y ocupación exclusiva en un territorio del pueblo respectivo, sus características propias) evalúen si la medida implica realmente una afectación directa, entendida, como ya se explicó (cfr. supra Fundamento 7.2.), como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. El análisis de estos elementos, de intensidad, permanencia o exclusividad, debe guiarse por un enfoque étnicamente diferenciado en la valoración de la afectación directa. Igualmente, para realizar dicho análisis y evaluación, la Corte considera que resulta particularmente relevante lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.

Así las cosas, el análisis de la situación territorial de la comunidad étnica en el acto administrativo recurrido, no buscaba generar un reconocimiento del territorio, sino que parte del entendimiento que la comunidad al carecer de un territorio geográfico debe analizarse si en el territorio amplio donde desarrollan actividades, sus dinámicas económicas, sociales y culturales pueden verse afectadas con ocasión de la ejecución de un proyecto, obra o actividad.

En este sentido, una vez revisado bajo el principio de proporcionalidad la intensidad, exclusividad y permanencia del uso del territorio amplio de la comunidad donde haría parte el cementerio del corregimiento, esta Autoridad encontró que los impactos que se pueden llegar a generar no son capaces de generar una afectación directa al colectivo, toda vez, que no se presentan los elementos esenciales de afectación directa.

5.8. FALSA MOTIVACIÓN Y VULNERACIÓN DE LA IDENTIDAD HISTÓRICA DEL PUEBLO INDÍGENA DE MOCONDINO.

Tal como lo sostuvo el recurrente en el anterior cargo, esta Autoridad no es competente para determinar la titularidad de predios y toda la información que se utiliza para los análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, están directamente ligados con la intensidad, permanencia y exclusividad que las practicas colectivas se predicen.

En este sentido tal como se encontró en la “FICHA CATASTRAL DE CEMENTERIO COMUNITARIO DE MOCONDINO 52001000100000046 – 0124-000000000”, el acuerdo 23 de febrero de 1945: Por el cual se hace una segregación y se destina para cementerio público el predio denominado “EL ARRAYAN” sobre el cual se construyo el cementerio del corregimiento y que fue aceptado por la Alcaldía Municipal mediante resolución del 26 de

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

febrero de 1945, se logra establecer la situación jurídica del predio y esta Autoridad no puede realizar análisis diferentes ni reconocer titularidades distintas a lo que documentalmente existe.

En este sentido, si bien para el estado Colombiano es una obligación garantizar la pervivencia de los colectivos étnicos y de sus culturales, esta Autoridad únicamente es competente para realizar análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, competencia que se llevó a cabo realizando un análisis del “*proyecto de granja avícola “la Isabella”*” no encontrando que la ejecución de las actividades desarrolladas sean susceptibles de afectar directamente a la Comunidad Indígena de Mocondino, situación por la cual, los planteamientos del recurrente de reconocer titularidades diferentes a las que documentalmente existen, así como garantizar la pervivencia de una comunidad étnica, son ajenas a esta Autoridad.

5.9. USO SESGADO Y SELECTIVO DE PRUEBAS (PARCIALIDAD PROBATORIA) Y CONCLUSIÓN ARBITRARIA SIN RECORRIDOS TERRITORIALES CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCONDINO

En relación con las reuniones adelantadas con terceros, esta Autoridad evidencia que este punto ya fue resuelto en el numeral 5.2 donde se explica el fundamento normativo y jurisprudencial de las distintas reuniones adelantadas durante la visita de verificación, por lo cual, se hará una reiteración a lo ya explicado:

- Pertinencia de la reunión con la Alcaldía Municipal y con la Corregidora de Mocondino: En este apartado es importante inicialmente recordarle al recurrente que la misma sentencia T-012 de 2025 estableció en su numeral segundo lo siguiente:

*Dicho trámite, y el acto administrativo que resulte del mismo, **deberá adelantarse teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia, particularmente las relacionadas con la (i) adecuada coordinación con las entidades de ordenamiento territorial; (ii) la participación de la comunidad indígena; y (iii) la motivación suficiente del acto administrativo de certificación, considerando los criterios de afectación enunciados en este fallo.***

En este entendido, es claro que parte del cumplimiento del fallo constitucional debía realizarse con la adecuada coordinación con las entidades de ordenamiento territorial, la cual teniendo en cuenta que tanto el proyecto como la comunidad étnica habitan el municipio de Pasto, era procedente realizar las reuniones necesarias con la Alcaldía Municipal de Pasto a través de sus funcionarios y fruto de dicha reunión, se estableció la necesidad de la reunión con la autoridad administrativa del corregimiento que corresponde a la Corregidora de Mocondino.

- Pertinencia de la reunión con la organización campesina: Es necesario aclarar que la reunión con la asociación campesina no fue fruto de un capricho de esta Autoridad, sino que fue el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto mediante Auto núm. 257 del 16 de junio de 2025, el cual ordenó:

5.- REQUERIR al MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, para que, en el marco de la visita de verificación programada para los días 17 al 20 de junio de 2025, garantice un espacio de diálogo efectivo a la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO (ASOCCAMO).

Así las cosas, es claro que esta Autoridad es respetuosa de las órdenes judiciales y por tal motivo, procedió a garantizar el espacio de dialogo con la Asociación Campesina del Corregimiento de Mocondino (ASOCCAMO).

- Pertinencia de la reunión con el ejecutor del proyecto: Es importante recordar que, en los procedimientos de consulta previa, que inician desde la determinación de procedencia de la consulta previa, siempre se han reconocido unos actores que son los ejecutores de los proyectos y las comunidades étnicas.

En este entendido, es claro que ambas partes que se encuentran involucradas en el trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, deben participar del trámite correspondiente, situación que fue conocida por la comunidad étnica desde antes de la realización de la visita de verificación, dado que desde la convocatoria realizada mediante

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

el Radicado 2025-2-002410-020008 Id: 550409 del 3 de junio de 2026, se convocó tanto al ejecutor como a la comunidad étnica y que dada la solicitud de la comunidad esta Autoridad actuó de puente para que las partes llegaran a un acuerdo frente a la logística de la visita de verificación a realizarse, tal como se consigno en los antecedentes de la resolución recurrida a saber:

“1.8. Que por solicitud de la Comunidad indígena de Mocondino, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa actuó como puente de comunicación entre la comunidad y el ejecutor del proyecto para la coordinación de las necesidades y requerimientos logísticos para la realización de la visita de verificación.

1.9. Que la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa solicitó a la comunidad indígena de manera formal el envío de la información a través de radicado 2025-2-002410-020391 ID 551511 del 04 de junio de esta manera la comunidad respondió mediante correo electrónico enviado el 09 de junio y radicado 2025-1-002410-044712 ID 554484 del 10 de junio de 2025.

1.10. Que este Despacho respondió a la comunidad a través de radicado 2025-2-002410-021262 ID 554346 de 09 de junio de 2025 y procedió a dar traslado al ejecutor a través de radicado 2025-2-002410-021314 ID 554467 del 10 de junio de 2025.”

Por consiguiente, la comunidad étnica siempre conoció la necesidad de la participación del ejecutor del proyecto en la visita de verificación sin que se generara oposición alguna.

Ahora bien, frente a lo manifestado por la comunidad quien alega que esta Autoridad no dio validez a las expresiones de la comunidad, es de recordar que, durante la visita de verificación, se desarrollaron las técnicas de entrevista semiestructurada y de cartografía social, en relación con la entrevista se puede apreciar que desde la pagina 19 a la 29 se hace un análisis de toda la información recolectada y por su parte en la pagina 30 se evidencia la cartografía social realizada, así las cosas, es claro que esta Autoridad si recopiló y usó toda la información proveniente de la comunidad étnica.

Adicional a lo anterior, es de aclarar que entre las paginas 35 a 45 se realizó un análisis específico de la información de la comunidad y como está se relacionó con toda la documentación recopilada durante la visita de verificación. Por lo cual, se evidencia que la información de la comunidad ocupa cerca de 20 páginas del análisis realizado, lo que demuestra que no hubo ningún sesgo en la información y que toda fue consignada muy ampliamente en el acto administrativo, lo que descarta el cargo presentado.

Por su parte, frente a la falta de recorridos en sitios de interés del colectivo étnico, tal como está Autoridad manifestó en el acto administrativo, se evidencio una situación de conflicto en el corregimiento el cual se encuentra documentado en:

- Acción de tutela en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PASTO, con radicado 52001-31-21-001-2025-00069-00, donde se presentaron los siguientes hechos:

“DECIMO PRIMERO. - La situación generada por la sentencia t-012 de 2025, expediente t-103509984, ha generado inconvenientes entre la comunidad campesina y las comunidades indígenas, que se hace necesario dirimir con la presencia de las dos comunidades, puesto que, ante la presunta vulneración de los derechos de los campesinos como sujetos de derechos, quienes estamos siendo víctimas de desplazamiento y amenazas se requiere la intervención de las autoridades del estado. Lastimosamente la apatía por parte de las diferentes entidades puede desencadenar hechos de violencia, que con una intervención oportuna del estado se pueden prevenir.

***DECIMO SEGUNDO.** – Hemos tocado las puertas de todas las entidades del estado que creemos pueden ayudar a esclarecer la situación de nuestro territorio campesino, pero ante la negativa estaremos llamados a hacer uso de las vías de hecho, y no permitir el ingreso de ninguna autoridad, hasta tanto se garantice nuestros bienes y derechos. Pues como se ha manifestado en el derecho de petición el origen de la consulta previa tiene fundamento en hechos falsos que se hace necesario su aclaración, y si bien existe comunidad indígena ellos no tienen injerencia en nuestro territorio.”*

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

- Reunión con la corregidora y la Alcaldía municipal el 19 de junio de 2025, donde se aclara que si existen tensiones entre ambos grupos desde la construcción de la vía perimetral y que se han aumentado por los análisis que está haciendo la ANT para la constitución del Resguardo, y como esto podría afectar la propiedad de los campesinos.
- Reunión con ASOCCAMO Y COMCASUD el 18 de junio de 2025, donde se expreso que estos grupos se oponían a la toma de puntos georreferenciados en territorio, mientras no se les garantice contradicción, defensa y participación frente a las afirmaciones de la comunidad sobre los puntos.

Dicha situación llevo a la decisión de evitar un enfrentamiento entre grupos de especial protección. Aclarando que esta Autoridad podía avanzar en el trabajo de forma autónoma dado que en la cartografía social ya la comunidad había identificado los sitios de interés, por lo cual, se adelantó georeferenciación de los siguientes puntos:

- Escuela vieja
- Junta cementerio
- Iglesia señora de la visitación
- Plaza de mocondino
- Institución educativa
- Granja Avicola
- Lindero malla granja
- Limite problema
- Punto de agua
- Entrada del cementerio
- Perimetral

Estos sitios en la cartografía social se identificaron como aquellos puntos de interés de la comunidad al interior del área urbana del corregimiento y se encontró que las demás practicas culturales como sitios de agua, cultivo, vivienda se desarrollan pasando la vía perimetral, en suma, la situación especifica que originó el fallo de tutela, esta relacionado con el “*proyecto de granja avícola “la Isabella”*” el cual se ejecuta es en la entrada del corregimiento y sobre la vía principal, sitios donde la comunidad étnica no relaciono practicas culturales diferentes a las del cementerio punto que también fue objeto de visita por parte de esta Autoridad.

En conclusión, la información para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa fue recogida en su totalidad y que si bien, no se visitaron ciertos puntos de interés de la comunidad étnica, estos no eran indispensables para llegar a una conclusión sobre la necesidad o no de la consulta previa, dado que los contextos del proyecto y donde la comunidad habita, se encuentran suficientemente distantes, por lo que el análisis se centró especialmente hacia los puntos más cercanos al área del proyecto como lo son los mencionados anteriormente. En este sentido, no es que se haya sesgado la información, sino que esta Autoridad ejerció una valoración de la situación especifica y determino la información necesaria a ser recopilada, evitando que la situación pudiera escalar a vías de hecho entre colectivos de especial protección constitucional.

5.10. MINIMIZACIÓN Y DISTORSIÓN DE LAS AFECTACIONES (FALSA CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS)

En atención a lo manifestado por el recurrente, esta Autoridad informa que, si hizo un análisis de cada uno de los elementos establecidos por la comunidad étnica y que fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional, a saber:

- Frente a los supuestos olores y desechos, por parte de esta Autoridad, se precisa que no se evidenciaron olores ajenos a la actividad comercial, tampoco se evidenciaron desechos de la granja diferentes al giro normal, de igual manera, se constató en la visita que los desechos son eliminados de conformidad con los horarios establecidos por el servicio de aseo municipal y se cuenta con zonas de

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

depósito en caso de requerir la asistencia de empresas de manejo de residuos, en suma, se revisó la documentación adicional donde se encontró: CERTIFICACION ICA COMO GRANJA BIOSEGURA y el REGISTRO SANITARIO DE PREDIO PECUARIO – RSPP.

- Frente a los impactos ambientales, esta Autoridad revisó el informe levantado por CORPONARIÑO, que es la entidad competente para atender dichos impactos y según los resultados de la visita técnica de CORPONARIÑO se concluyó que no se aprecian olores ofensivos dentro del área que se encuentra en remodelación, no se evidencian focos de generación de vectores como ratones, ratas, moscos y mosquitos, en el área de los galpones que se encuentran en funcionamiento no se encuentran evidencias de olores molestos, generación de vectores y no se realizan vertimientos de aguas residuales.
- En lo relacionado con el uso de agua y contaminación a fuentes de agua, se evidencio que el proyecto no tiene permisos de concesión ni de vertimientos de agua, no hay fuentes de agua de interés de la comunidad étnica cercanas al área del proyecto y el uso del agua se encuentra reglamentado por la Junta Administradora del Acueducto.
- Sobre el impacto al cementerio, esta Autoridad encontró que el mismo es del Corregimiento y es administrado por una Junta Administradora, no es exclusivo de la Comunidad Indígena de Mocondino y el uso no es intenso ni permanente, dado que su uso depende del horario habilitado al publico y su uso depende de la Junta.

En lo referente a la vía de acceso al cementerio, esta Autoridad revisó el documento emitido por la Subsecretaria de Aplicación de Normas Urbanísticas de la Alcaldía de Pasto el 22 de abril de 2024, en la cual establece que el perfil consolidado de la vía es de 2.65 metros y la distancia entre ejes es de 5.30, medida que se cumple en la vía de acceso, es de aclarar que de igual manera, en caso de existir controversias sobre los temas viales, estos deben ser atendidos por la Alcaldía Municipal al ser situaciones de su competencia.

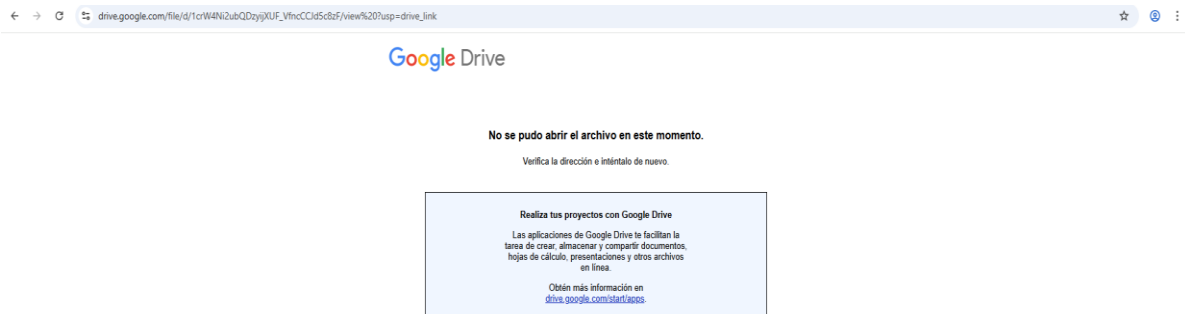
En atención a lo anterior es claro que, revisados todos los elementos descritos por el recurrente en este cargo, no se evidencia ninguna evidencia razonable que permita determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, dado que todos los elementos que la comunidad étnica considero relevantes fueron analizados sin encontrar ningún indicio de afectación a dinámicas económicas, sociales o culturales.

5.11. ERROR GRAVE DE HECHO SOBRE LA ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO

Frente a la afirmación realizada, esta proviene de la entrevista sostenida con la dueña del proyecto, por lo cual, se toma bajo el principio de buena fe, es de aclarar que la antigüedad no es un elemento diferencial frente a la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, dado que lo que esta Autoridad busca determinar es si las actividades son susceptibles de afectar o no al colectivo étnico.

De igual manera, esta Autoridad intento acceder al documento suministrado para evidenciar la situación presentada, encontrando que el acceso al archivo se encuentra denegado tal como se puede evidenciar a continuación:

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.



Así las cosas, se informa que la relevancia de la antigüedad de la existencia del proyecto no es un criterio determinante que permita la modificación de la decisión tomada de fondo, dado que simplemente es un dato que da una contextualización. En este sentido, dado que no se evidencia como este dato podría afectar la decisión tomada y que no se puede consultar el archivo adjunto este cargo se desestima bajo los principios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba.

5.12. OMISIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES DIRECTAS Y ACEPTACIÓN EXPRESA DE CONTAMINACIÓN

Frente a los argumentos del recurrente sobre la omisión de la resolución, esta Autoridad se permite hacer un análisis de cada uno de ellos a saber:

- Construcción de galpones junto a 40 viviendas del sector y construcción de pozos de agua junto al cementerio: Esta Autoridad aclara que durante la visita de verificación realizada y la entrevista semiestructurada, así como la cartografía social, la comunidad étnica no relacionó la existencia de viviendas de miembros del cabildo al lado del proyecto o de puntos de agua de interés del colectivo en inmediaciones del predio del proyecto, sino que relacionó estos puntos es pasando la vía perimetral.

Es de aclarar que la consulta previa es un derecho únicamente de comunidades étnicas y los análisis que se realizan no van dirigidos a la población en general, razón por la cual, el análisis de dichas situaciones nada tiene que ver con las posibles afectaciones al colectivo étnico.

- Frente a la existencia y proliferación de estas aves, esta Autoridad resalta que estos impactos ambientales son revisados y supervisados por las Autoridades ambientales competentes, que para el caso objeto de análisis corresponde a CORPONARIÑO, en este sentido según la visita de la Corporación al área del proyecto, no se evidencian focos de generación de vectores como ratones, ratas, moscos y mosquitos, en el área de los galpones que se encuentran en funcionamiento no se encuentran evidencias de olores molestos, generación de vectores y no se realizan vertimientos de aguas residuales. Lo cual desvirtúa que el proyecto genere condiciones que permitan la proliferación de los vectores descritos por el recurrente.

Así las cosas, los elementos descritos por el recurrente que, si tienen que ver con la comunidad étnica visitada, si fueron analizados y estudiados durante la visita de verificación adelantada, además hacen parte de la resolución recurrida.

5.13. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y CARGA PROBATORIA INDEBIDA.

En relación con lo manifestado por el recurrente frente a la falta de aplicación del principio de precaución, es de aclarar que este principio tiene por objeto:

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

“El principio de precaución es un elemento estructural del derecho ambiental, que está dirigido a evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente, imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar en los recursos naturales.

(...)

De la definición indicada se puede establecer que el principio de precaución tiene dos manifestaciones: en primer lugar, se observa que a pesar de la incertidumbre sobre los efectos nocivos que determinada actividad pueda tener frente al medio ambiente deben tomarse las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar un daño, consistan éstas en una acción o en una omisión. Es decir, no es necesario que exista certeza científica del daño para implementar las medidas a

que haya lugar, éstas se justifican aun en aquellos eventos donde haya duda respecto a los perjuicios que puede causar determinada actuación. Se debe decidir a favor del ambiente - in dubio pro ambiente- (González, 2006, p. 205).

En segundo lugar, implica que la carga de la prueba se invierte, es decir, quien pretende defender el medio ambiente no tiene que demostrar que la acción afecta los recursos naturales, por el contrario, es quien ejecuta la acción “posiblemente” lesiva, quien debe demostrar que el medio ambiente no se está viendo alterado negativamente o que se han tomado las medidas preventivas necesarias para evitar el daño.”

En este sentido, para que su aplicación se pueda generar debe existir una falta de certeza sobre los impactos que se puedan generar, en este sentido, durante el desarrollo de la visita de verificación esta Autoridad de la información que recopiló lo encontró ningún elemento que le plantee duda sobre la afectación directa sobre el colectivo étnico.

Así mismo, en ningún momento esta Autoridad invirtió la carga de la prueba, dado que quien debió probar la ausencia de afectaciones fue el ejecutor del proyecto, quien allegó elementos probatorios que permitían verificar el cumplimiento de la normativa ambiental tales como:

- CERTIFICACION ICA COMO GRANJA BIOSEGURA.
- REGISTRO SANITARIO DE PREDIO PECUARIO – RSPP
- RESULTADOS DE LA VISITA TECNICA DE CORPONARIÑO DONDE CONCLUYERON: No se aprecian olores ofensivos dentro del área que se encuentra en remodelación, no se evidencian focos de generación de vectores como ratones, ratas, moscos y mosquitos, en el área de los galpones que se encuentran en funcionamiento no se encuentran evidencias de olores molestos, generación de vectores y no se realizan vertimientos de aguas residuales.

Así las cosas, es claro que la conclusión allegada por esta Autoridad tiene como insumos, también las conclusiones que fueron encontradas por otras Autoridades administrativas como el ICA y CORPONARIÑO.

El recurrente en el presente cargo hace es una mala interpretación del principio de precaución, dado que pretende controvertir la decisión adoptada mediante los elementos probatorios recaudados, es de resaltar que la consulta procede es bajo la posibilidad de una afectación directa a un colectivo étnico, mas no como mecanismo de recaudación de información ambiental tal como lo propone el recurrente.

5.14. FALSA MOTIVACIÓN SOBRE SUPUESTOS ROBOS Y CERRAMIENTO IRREGULAR.

Frente a este cargo, esta Autoridad informa que esta afirmación se genera con ocasión de la reunión adelantada entre la DANCP, CORREGIDORA y ALCALDIA MUNICIPAL, el 19 de junio de 2025, donde se dejó constancia de lo siguiente:

“Se habla sobre la querella presentada donde a raíz de la construcción de un muro el comité destruyó la obra por considerar que se invadía el espacio público, a raíz de esto, allegó planeación quienes hicieron la revisión y emitieron un perfil vial actualizado y se sancionó por perturbación al comité del cementerio.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

Frente a las ordenes específicas de la corte constitucional a la Alcaldía, la corregidora explica que ya se adelantó el procedimiento administrativo por infracciones urbanísticas donde se realizaron todas las actividades correspondientes y se procedió al cierre del trámite no encontrando infracciones urbanísticas”

Así las cosas, se evidencia que si existe una querella instaurada y que si existen sanciones implementadas, ahora bien, en caso de querer conocer los documentos específicos sobre inventarios y demás, estos son de competencia de la Corregidora quien adelanto el trámite correspondiente y que como se ha aclarado simplemente esta Autoridad utiliza estos elementos como contextualización de la situación presentada, siendo claros en que el trámite administrativo propia de la querella es competencia de la Corregidora.

5.15. OMISIÓN DE LA AFECTACIÓN AL ACCESO DEL CEMENTERIO Y DESCONOCIMIENTO DEL POT.

Tal como lo informa la comunidad esta Autoridad tuvo conocimiento de la situación de la vía de acceso al cementerio, de conformidad con lo establecido en el documento emitido por la Subsecretaria de Aplicación de Normas Urbanísticas de la Alcaldía de Pasto, el 22 de abril de 2024, en la cual establece que el perfil consolidado de la vía es de 2.65 metros y la distancia entre ejes es de 5.30.

Adicional, esta Autoridad tuvo conocimiento por parte de la corregidora que *“ya se adelantó el procedimiento administrativo por infracciones urbanísticas donde se realizaron todas las actividades correspondientes y se procedió al cierre del trámite no encontrando infracciones urbanísticas”*

En este sentido, ambas situaciones son competencia de la Alcaldía Municipal y esta Autoridad en el marco de las competencias establecidas por el Decreto 2353 de 2019, únicamente es competente para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, por lo cual, la situación vial escapa de nuestro marco misional.

5.16. DESCONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCONDINO.

Como primer elemento de este cargo, esta Autoridad aclara que, sobre la situación de titularidad del cementerio, este fue analizado en el ítem 5.3 por lo cual, nos permitimos reiterarlo:

“entre la información probatoria que recopiló durante la visita de verificación, encontró el documento denominado “FICHA CATASTRAL DE CEMENTERIO COMUNITARIO DE MOCONDINO 52001000100000046 – 0124-000000000, en el cual se encuentran los siguientes documentos:

Acuerdo 23 de febrero de 1945: Por el cual se hace una segregación y se destina para cementerio público: En dicha resolución se logra entender que el cabildo de mocondino resuelve segregar un predio por utilidad pública e interés social por abandono de Clara Naspiran, quien se ausento de la parcialidad sin dejar marido ni hijos, resolviendo que se declare de utilidad pública para la construcción de el nuevo cementerio en el lote de terreno del resguardo para servicio del pueblo, teniendo en cuenta las condiciones higiénicas que la sanidad exigía. Todo esto, el Cabildo lo hizo en beneficio de los moradores de mocondino ósea para un bien general.

Resolución de la solicitud de revocatoria de la resolución 26 febrero de 1945 y del acuerdo del 23 de febrero de 1945: En dicho documento se evidencia que la Alcaldía de Pasto resolvió la solicitud de revocatoria contra la resolución del 26 de febrero proferida por la Alcaldía Municipal, por medio de la cual se aprobó el acuerdo del 23 de febrero expedido por el Cabildo de Mocondino, y por la cual se declaró de utilidad publica una parte de lote de terreno denominado “EL ARRAYAN” y se le destino para cementerio de esa población. Durante dicho trámite la alcaldía resolvió declarar prescrita la acción propuesta contra la resolución del 23 de febrero de 1945 y de la resolución del 26 de febrero de 1945 aprobatoria del acuerdo del terreno “ARRAYAN” de los resguardos de Mocondino y que ha sido destinado para el cementerio de ese lugar, confirmada posteriormente en sede de apelación expedida el 14 de mayo de 1947.

En este entendido, es claro para esta Autoridad que del material documental recopilado, se encontró que el Resguardo Indígena de Mocondino en uso de sus facultades legales, segregó

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

y destino para cementerio publico el lote “EL ARRAYAN”, actuación que fue aprobada por la alcaldía municipal mediante la resolución del 26 de febrero de 1945 y que fue sujeto de los recursos legales de la época que fueron decididos el 14 de mayo de 1947 reconociendo que el lote “EL ARRAYAN” era de utilidad pública para la construcción del nuevo cementerio teniendo en cuenta las condiciones higiénicas que la sanidad exigía.”

Ahora bien, esto no significa que esta Autoridad no reconozca que el cementerio si es un punto de interés del colectivo étnico, sino que lo reconoce es como parte del territorio amplio de la comunidad étnica y por tal motivo, se debe realizar un análisis bajo el criterio de proporcionalidad establecida por la misma Corte Constitucional en la Sentencia SU-123 de 2018 a saber:

Igualmente, conforme al principio de proporcionalidad, en este territorio amplio es posible que las autoridades competentes, para determinar si existe o no afectación directa por impacto en el territorio, tomen en consideración la intensidad y permanencia efectiva con la cual un pueblo étnico ha ocupado o no un determinado espacio específico, el grado de exclusividad con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción.

Esto es así por cuanto los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio amplio no tienen el mismo alcance que aquellos que poseen y ejercen en el territorio geográfico. Por consiguiente, no toda medida que pueda tener algún impacto en el territorio amplio de un pueblo étnico implica automáticamente que exista una afectación directa que haga exigible la consulta previa. Será necesario que las autoridades en el caso concreto, y tomando en cuenta factores como los mencionados anteriormente (grado de permanencia y ocupación exclusiva en un territorio del pueblo respectivo, sus características propias) evalúen si la medida implica realmente una afectación directa, entendida, como ya se explicó (cfr. supra Fundamento 7.2.), como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. El análisis de estos elementos, de intensidad, permanencia o exclusividad, debe guiarse por un enfoque étnicamente diferenciado en la valoración de la afectación directa. Igualmente, para realizar dicho análisis y evaluación, la Corte considera que resulta particularmente relevante lo dispuesto en el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los “gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.

En este sentido, no se encontró ninguna afectación directa con ocasión de la ejecución del “proyecto de granja avícola “la Isabella”” en relación con la comunidad étnica, dado que no se presenta ninguno de los siguientes elementos:

(i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.

En este sentido, cuando se habla de que no hay coincidencia de contextos, significa que no se evidencia ninguna afectación generada por el proyecto en las dinámicas económicas, sociales y colectivas de la Comunidad Indígena de Mocondino.

Así las cosas, y luego de haber hecho un análisis detallado de todas las solicitudes planteadas por el recurrente en los puntos 5.1 al 5.16, esta Autoridad no evidencia ningún elemento que permita modificar la decisión tomada.

Continuación resolución “Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el Resguardo Indígena de Mocondino, en contra de la Resolución No. ST-2242 de 19 de diciembre de 2025 – proyecto: “PROYECTO DE GRANJA AVÍCOLA “LA ISABELLA” DENTRO DEL CORREGIMIENTO DE MOCONDINO DE LA CIUDAD DE PASTO – SENTENCIA T-012 DE 21 DE ENERO DE 2025”.

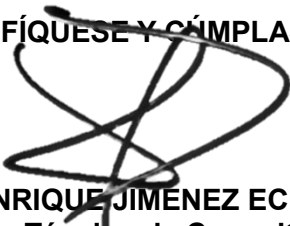
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Técnica de Consulta Previa,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en cada una de sus partes la Resolución ST - 2242 de 19 de diciembre de 2025.

SEGUNDO. ORDENAR la notificación del presente acto administrativo al recurrente mediante el correo electrónico silvionaspiran@gmail.com - cabildomocondino@gmail.com y al ejecutor del proyecto mediante el correo electrónico emma.r.733@hotmail.com, de conformidad con lo establecido por la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa

Elaboró acto administrativo: Simón Latorre, Coordinador Grupo de Actuaciones Administrativas de Procedencia de Consulta Previa.	Aprobó: Alfonso Enrique Jiménez Echeverría - Subdirector Técnico de Consulta Previa
--	--

T.R.D. 2710.4.291
Notificación Electrónica:

Comunidad Mocondino: silvionaspiran@gmail.com - cabildomocondino@gmail.com
Ejecutor: emma.r.733@hotmail.com